

# COMENTARIOS POLITICOS

Los enemigos  
del Estado  
toman el  
Poder

En la calurosa noche del 25 de junio de 1981, Fidel Castro asistió a una cena de reducidos comensales en la deslumbrante embajada de México en La Habana. Gonzalo Martínez Corbalá, que en aquella fecha era el embajador mexicano en Cuba, enfatizó en su discurso la solidaridad que ha existido siempre entre ambos países. Antes de poner el punto final a la reunión, Fidel desdobló su estatura colosal, y con una copa que siempre le queda chica entre las manos brindó en honor de México, Cuba y sus respectivas revoluciones. Dijo: "Ambos Estados son fruto de una Revolución. Nosotros no podemos olvidarnos de cuándo se produce la Revolución Mexicana, antes de la Primera Guerra mundial; cuando se hicieron las primeras reformas, las primeras leyes, la primera Constitución. Años antes de la Revolución de Octubre en el viejo imperio de los zares, la Revolución Mexicana era considerada como uno de los procesos políticos más avanzados el mundo. Nuestra revolución no tiene lugar en el año 13 o en el año 14. Nuestra revolución tiene lugar en el año 59. En otra época. Prácticamente en otro mundo. Pero yo pienso que la Revolución Mexicana fue lo más avanzado que pudo ser una revolución en aquella época.

Soy un gran admirador de la forma en que ustedes decidieron institucionalizar ese proceso y llevarle adelante hasta hoy, manteniendo principios, manteniendo la convicción en las condiciones de un proceso legítimo, manteniendo los principios de la dignidad, de la independencia, de la lucha por los derechos nacionales. Mucho antes del triunfo de la revolución, me dediqué un tiempo a estudiar y a leer los libros sobre México: la Revolución Mexicana, la guerra revolucionaria en México, las luchas, los combates, las batallas en todos los aspectos, tanto el social como el económico; por esa razón, analizando nuestro proceso la revolución que hicimos nosotros, vemos que no la importamos de ninguna parte y que después nadie la exportó; que, como la Revolución Mexicana, fue absolutamente auténtica y legítima; como lo ha sido también la Revolución de Nicaragua. . . por eso, si nos tocara el infortunio de tener que enfrentarnos a una agresión norteamericana será muy duro para nosotros, pero creo que va a ser muy duro también para los agresores. Si nos tocara desaparecer de la faz de la tierra, vamos a desaparecer con la dignidad suficiente como para manchar de dignidad suficiente al mundo entero. No estamos diciendo más que lo que dijeron los mexicanos cuando vieron concluir su revolución. No estamos diciendo más que lo que estoy seguro dirán los mexicanos si un día vieran en peligro su patria. Estoy seguro que los 70 millones de mexicanos serían capaces de imitar el gesto glorioso e inmortal de los niños héroes de Chapultepec. Yo digo que son simplemente estilos, diferentes modos, diferentes formas que obedecen a la época en la que cada revolución se produce. En definitiva, nosotros estamos demostrando que por encima de

épocas diferentes y por encima de esas formas que corresponden a las épocas es posible la máxima colaboración; y por ese camino, con absoluta lealtad, absoluta sinceridad, absoluta honestidad en materia de integración con México, en materia de unión con México, estamos dispuestos a llegar tan lejos como sea necesario. Y por eso digo que las diferencias son intrascendentes en la historia, lo fundamental y lo importante son las cosas que tenemos en común. Hermanos mexicanos, quiero gritar de corazón: ¡Viva México! ¡Viva Cuba!". Emocionados se levantaron y gritaron Gonzalo Martínez Corbalá; Carlos Rafael Rodríguez, vicepresidente de Cuba; y Miguel De la Madrid, que aún era secretario de Programación y Presupuesto. Dos meses más tarde, el mundo se enteró que sería el próximo presidente. Año y medio después, días antes de cumplir sus 48 inviernos, se convirtió en el timonel de la revolución elogiada por Fidel Castro aquel verano.

En sus orígenes, la jefatura máxima de la Revolución Mexicana ha sido ocupada por hacendados como Venustiano Carranza, rancheiros como Alvaro Obregón, y jefes de policía como Plutarco Elías Calles; los siguientes presidentes fueron generales y los últimos han sido abogados. La secuencia tiene una lógica férrea: las escuelas de la guerra auspiciaron el predominio del ejército, y durante más de tres décadas, las decisiones políticas de mayor envergadura se tomaron en los cuarteles. La proliferación de las oficinas y los burócratas empezó después de las reformas cardenistas. En distintas épocas, los hombres de confianza de los jefes de Estado han sido caciques regionales, militares de carrera y civiles fogueados en las filas del par-

tido gobernante. Hombres de fiar han sido, con características diferentes, Salvador Alvarado, el general Abelardo L. Rodríguez, el Gral. Francisco Múgica, Augusto Gómez Villanueva y Fidel Velázquez. En contrapartida, el equipo que el nuevo presidente instaló como gabinete resulta pobre en políticas con recia experiencia, y abunda en hombres de la academia que han cursado estudios superiores en Inglaterra, Francia y los Estados Unidos. Entre los primeros destaca Jesús Reyes Heróles, el más terco reformador que ha dado el sistema en las últimas décadas, y Pedro Ojeda Paullada, que ha hilvanado su tercer cargo secretarial después de haber arañado el sueño de llegar a presidente. Los segundos forman caravana: Manuel Bartlett estudió en París y Manchester, Bernardo Sepúlveda en Cambridge, Jesús Silva Herzog en Yale, Carlos Salinas de Gortari en Harvard, Hector Hernández en Melbourne, Guillermo Soberón Acevedo en Wisconsin. Si recordemos que el sistema político mexicano se ha contemplado como una estructura piramidal en la que la autoridad fluye de la cúspide a la base a través de políticos regionales, caciques e intermediarios observaremos que la composición del nuevo gabinete contradice los ascensos políticos tradicionales del sistema. En efecto, ni el actual presidente ni muchos de sus jóvenes secretarios han sido dirigentes locales del partido, diputados, senadores o gobernadores, y todos aquellos que lo fueron tienen que admitir un nuevo equipo al mando. La hora de la inconformidad con los nombramientos se perdió en el rumbo que tomó la carrera política de Javier García Paniagua. Hoy, la revolución ha renovado abruptamente sus cuadros: no hay nada más alejado de un cacique de zona que un doctor en Harvard.

Sin embargo, la historia del arribo del nuevo gobierno al poder se inicia en los primeros años de la déca-

da pasada. A partir de 1970, la tarea más urgente del sistema ha sido la modernización. Se ha repetido hasta el cansancio que el modelo de desarrollo, bautizado estabilizador, había tocado su fin; pero a pesar de las voces que aconsejaban enterrarlo, el tipo de crecimiento se repitió sin cansancio, y no nos ha abandonado hasta la fecha. Lo cierto es que en los últimos años de la década de los sesenta, las exportaciones nacionales ya no podían impulsar la industrialización; la agricultura había dejado de alimentar al país; los monopolios se habían adueñado de los mecanismos más importantes de la producción y el mercado; el país exhibía una de las distribuciones más injustas del ingreso en el mundo, y el autoritarismo del sistema había terminado en matanzas. Ante este lúgubre panorama, el gobierno de Luis Echeverría trató de abrir las válvulas de la inconformidad con lo que se llamó la apertura democrática, que a la postre se redujo a devolver la libertad a los dirigentes presos del movimiento estudiantil de 1968. Simultáneamente, trató de limitar y regular la esfera de las inversiones extranjeras, resucitar al ejido colectivo para convertirlo en el eje de la producción agrícola, distribuir los ingresos mediante una reforma fiscal, darle una orientación más popular al gasto público, impulsar y diversificar las exportaciones y apoyar las luchas de liberación de los países del Tercer Mundo. Como se sabe, pocas medidas prosperaron, y el saldo final del proyecto fue el fracaso. La mayor crisis del capitalismo desde 1929, que empezó a hacer erupción en los primeros años de los setentas, provocó un estancamiento productivo y una marea inflacionaria cuyo oleaje continúa azotando los bolsillos de todo el mundo. La economía mexicana prolongó su estrangulamiento, y las exportaciones no pudieron darle respiro. Ante la debilidad de la planta productiva, las inversiones extranjeras se multiplicaron, y el sector

externo de la economía se agrietó aún más. La colectivización de los ejidos parcelados que dejaba intactos a los latifundios existentes, fue rechazada por los propios campesinos, que vieron en ella la formación de empresas estatales organizadas verticalmente sin su participación, en detrimento de su economía familiar. Sin los mecanismos adecuados para allegarse recursos internos, el aumento intermitente del gasto público arrojó al Estado a los abismos de endeudamiento externo, y el duende de la reforma fiscal indujo a los empresarios a organizarse independientemente. Eso, aunado a la recepción de los exiliados chilenos y las expropiaciones de tierra en Sonora, provocó que la coalición de industriales, banqueros, comerciantes y terratenientes organizara medidas de escándalo al sentir amenazados sus intereses. Aquel sexenio se fue en medio de una orquesta de huelgas patronales y rumores catastróficos.

José López Portillo llegó al poder con la clara intención de tranquilizar los ánimos exaltados de los empresarios. El reparto agrario, que constituía una amenaza recurrente del gobierno echeverrista, fue eliminado de los discursos oficiales. La alianza para la producción, el nuevo emblema sexenal, se tradujo en reducción del gasto público, límites a los aumentos salariales y un ramillete de estímulos a la empresa privada. Las recetas del Fondo Monetario Internacional fueron aplicadas puntualmente. Con todo, el gobierno no olvidó las urgencias de la modernización. Una de las mayores auspicios, finalmente, el movimiento de la Reforma Política. Bajo su manto, otros partidos, nuevos y viejos, tuvieron legitimidad; los espacios de la contienda electoral dieron cabida a siete candidatos a la presidencia en las últimas elecciones; la composición del Poder Legislativo se amplió y diversificó, y se extendió la libre discusión de

ideas en nuevos y viejos medios de difusión. Mientras la economía del país se ofrecía como plato fuerte en los banquetes empresariales, el sistema político ampliaba sus fronteras de tolerancia y se abría a nuevas negociaciones.

A mediados del sexenio, la revolución centroamericana y los hallazgos petroleros obligaron al gobierno a una serie de decisiones de importancia capital. Por un lado, las relaciones comerciales quedaron selladas, en un plazo que ahora se vislumbra perentorio, por la negativa del país a ingresar al GATT. En otro plano, la ruptura de relaciones con el régimen de Anastasio Somoza en 1979, marcó el inicio de una profunda transformación de las relaciones internacionales de México, dejando atrás la defensa pasiva de los principios de no intervención, y promoviendo activamente al derecho a la soberanía de las naciones, especialmente las más cercanas geográficamente. La solidaridad con Cuba en el momento en que las amenazas de Haig se despeñaban sobre la isla; la defensa del derecho nicaragüense a la autodeterminación de su rumbo; las riñas con los oscuros gobernantes guatemaltecos; los esfuerzos conjuntos con Francia para resolver pacíficamente el conflicto salvadoreño y los forcejeos resultantes con la política de Ronald Reagan, constituyen artistas diferentes de un mismo cambio. Por aquellas fechas, también, el petróleo le dio un vuelco definitivo a la economía del país. Un par de cifras, más que evidentes, resultan apabullantes: en 1976 las reservas probadas eran 6 mil millones de barriles de petróleo; hoy son 72 mil millones. No sin sorpresa, nos convertimos en el cuarto pozo petrolero del mundo. El gobierno de López Portillo no dudó en utilizar esa formidable palanca. En consecuencia, desde 1979 aumentaron la producción y la exportación petrolera, las inversiones para ampliar instalaciones y adquirir más equipos

y las deudas para sufragar el nuevo milagro. Momentáneamente, la imagen de México en el exterior dejó de ser la de un campesino que duerme en cuclillas a mitad de un desierto; una torre petrolera de PEMEX ocupó su lugar.

En la base del auge y los festejos hubo un gran interés y un error de cálculo. Además del interés que tuvo el gobierno mexicano por aprovechar la nueva fuente de riqueza, los Estados Unidos no dejaron de animar la posibilidad de asegurarse un lugar más cercano, más seguro y más barato para obtener crudo. La Revolución Iraní, la guerra de este país con Irak, el permanente estado convulsivo de Oriente Medio, la lejanía y los gastos de transportación, impulsaron a los Estados Unidos a realizar varias investigaciones sobre los yacimientos mexicanos, y a presionar al gobierno mexicano para que ampliase la plataforma de producción. En un par de años lo lograron: en 1981, México producía 2 y medio millones de barriles al día. En esta aventura hubo, además, una equivocación que a la postre resultó fatal: el Plan de Energía preveía un aumento permanente de los precios del petróleo hasta el próximo siglo. Desde esta perspectiva, los endeudamientos con el exterior serían sólo nubes pasajeras en el paisaje luminoso de las ganancias por las ventas de crudo. Sin embargo, la tendencia del mercado mundial petrolero apuntaba en otra dirección: los países desarrollados buscaban formas de reducir su consumo petrolero, y se preparaban para utilizar nuevas fuentes de energía. Cuando la demanda se encogió y los precios se desplomaron, ya no había remedio; la renuncia de Jorge Díaz Serrano no mejoró la situación. Con todo, la efímera bonanza trajo un caudal de modificaciones importantes: la economía nacional creció, en un par de años, al 8%, que significaba dos veces más que el crecimiento de la economía estadounidense en

el mismo periodo; la planta industrial se duplicó en tamaño, pero también en dependencia; además, con una parte de los beneficios obtenidos se generaron 4 millones de empleos, se estructuró el Sistema Alimentario Mexicano y se impulsaron los programas de COPLAMAR. El país logró, momentáneamente, superar los índices negativos de producción de granos, y los empleos alcanzaron muchas zonas deprimidas. En cambio, la parte restante de la fiesta se fue a las alforjas de los empresarios que disfrutaron tanto de las bendiciones del petróleo como la ausencia de una reforma fiscal, de los subsidios y favoritismos de siempre, y de una libertad cambiaria que les animó a tratar de recuperar Texas a partir de la compra de condominios. En el último año del sexenio, cuando se fundó la fuga de capitales más impresionante de la historia del país, el sueño de forjar una economía se hizo añicos, y la primera imagen del despertar fue una deuda pública astronómica, justo en el momento en que el país se descubría con los bolsillos rotos: cada mexicano debe hoy poco más de mil dólares. Lo peor fue que otras cifras no cambiaron: la mitad de la nación está destruida, más de la mitad no ha terminado sus estudios primarios y cada seis años hay un millón de muertes, casi todas de niños por deficiencias en la alimentación y salud.

Como despedida, ante una situación de caos económico y devaluación vertiginosa del poder político, José Lopez Portillo nacionalizó la banca, en un desplante individual fuera de todo canon: aunque la medida había sido exigida por amplios sectores de la izquierda desde hace muchos años, no existía en el pasado inmediato una movilización popular que la impulsase y le sirviera de apoyo. La nacionalización se llevó a cabo contra los banqueros, con la indig-

nación de los empresarios, a pesar de la opinión de la mayoría del gobierno, sin el acuerdo del entonces candidato presidencial, ante la sorpresa de todos los mexicanos y el asombro del mundo entero. Con una decisión firmada, el país había cambiado de perfil. Los bancos fueron, en manos de los empresarios, los taladros más potentes para perforar la mina de oro. Gracias a ellos, los banqueros se adueñaron de las empresas más poderosas del país, duplicaron su fortuna vendiendo dólares y comprándolos baratos, y le disputaron al Estado el mando de la República. Cuando parecía que lo habían ganado, el presidente sacó fuerzas de la historia, invocó los orígenes de la propiedad, y con la Constitución en la mano los mandó a la lona. Con la banca en sus manos, el Estado había quedado en una situación mucho más favorable para dirigir sin escollos la política económica del país, y los banqueros habían sido borrados como grupo de presión para los gobiernos por venir. Así, el sexenio que acaba de terminar no murió intestado: legó a su sucesor una mayor legitimidad proveniente de las urnas, y un Estado con mayor poder. Además, ayudó a convertirnos en el cuarto país petrolero del planeta, pero también el más endeudado. A fin de cuentas, al poner en marcha la Reforma Política y nacionalizar la banca un gobierno que transitó todos los caminos para restaurar la cofianza empresarial, resultó el más reformista desde los tiempos de Cárdenas.

Los tres últimos meses del gobierno de López Portillo dieron la apariencia de cambiar el rumbo que había seguido la política económica del Estado en los últimos cuarenta años. En las calles, los bancos ondeaban la bandera nacional, y la política financiera se orientó al beneficio de los pequeños ahorradores; el control generalizado de cambios liquidó la fuga de capitales; las cámaras

empresariales pasaron a la defensiva, mientras el Congreso discutía la publicación de los nombres de los "sacadólares"; las empresas propiedad de los banqueros se mantuvieron en manos del Estado; Carlos Tello, enemigo abierto de las políticas de beneficio empresarial, ocupó la jefatura el Banco de México; el PRI organizó una manifestación colosal para apoyar las medidas de septiembre; la izquierda se abrazaba en el zócalo. Sin embargo, el viraje se detuvo en el pleno arranque: el presidente delegó en su sucesor el diseño y la puesta en marcha de la nueva utilización de la banca nacionalizada, y el gobierno abrió un compás de espera que se tradujo en inactividad total. Las oficinas públicas se convirtieron en desiertos, y un invierno frío y prematuro congeló los movimientos de país. En ese lapso, la única actividad visible fue la apertura de casas de cambio en la frontera norte primer síntoma del resquebrajamiento de las nuevas medidas.

El ascenso de Miguel De la Madrid a la presidencia fue saludado con simpatía por la prensa norteamericana. En un número de diciembre, *Time* dibujó un pormenorizado retrato de su personalidad: hijo de la clase media en ascenso, buen estudiante, alumno de John Kenneth Galbraith, hijo y padre responsable, propietario de una pequeña casa en Coyoacán y otra en Cuautla, funcionario educado en los despachos de las finanzas, enemigo del peculado y cualquier forma de corrupción, ordenado, sereno, austero y meticuloso, lector de Carlos Fuentes y Morris West, escucha de Mozart y Agustín Lara. Junto a esta descripción, y con el supuesto de presentar una visión amplia y analítica del país, se recogieron varias voces: un productor de manufacturas dijo que no habíamos estado en peor situación desde la revolución; un plomero de ciudad Netzahualcoyotl declaró que la vida sería dura en estos mo-

mentos, y que seguramente iría a empeorar; un empresario norteamericano afirmaba que la población tiene miedo y está confundida, y que si De la Madrid no gana la confianza debida, muchos mexicanos abandonarían el país, y un oficial de la administración de Reagan sostuvo que México es el escenario más codiciado para el aventurismo comunista en este continente. Basándose en estos diagnósticos de catástrofe, la revista adelanta la necesidad de un cambio radical en la política del país, y cree ver los primeros indicios de la transformación en el hecho de que el nuevo presidente redujo considerablemente su escolta, mientras su chófer conduce por las avenidas de la ciudad respetando los semáforos. Los indicios no eran muy sólidos, pero al cabo de un mes las sospechas se confirmaron.

En el momento en que un grupo de legisladores acudió a la casa de Coyoacán para anunciarle a De la Madrid que la votación lo había favorecido, el nuevo presidente reiteró que gobernaría empuñando los puntos anunciados en su campaña electoral. Cuando tomó posesión el pasado primero de diciembre, se anunciaron modificaciones sustanciales. La crisis, esa peste que había sido soslayada o minimizada por los gobiernos anteriores, fue anunciada como llamados de alarma general. La casa se ha incendiado, señores: salgamos por la puerta de emergencia. Esa salida implica reducción del gasto público, administración austera, aumento de las tarifas de los servicios públicos, mayores impuestos, sacrificios salariales, freno a la inversión pública, aumento del desempleo y control del circulante. El punto número uno del orden del día es resolver la crisis; la distribución de la riqueza vendrá más tarde. La sociedad igualitaria, uno de los tópicos del programa de la campaña electoral, tendrá que esperar. El presidente lo dijo claramente: "Lucharemos desde hoy

contra la desigualdad, pero en este renglón, como en todos, he de ser sincero con los mexicanos. Mientras subsista la crisis, no podremos avanzar cuantitativamente en el proceso de justicia social; el peligro inmediato está en el deterioro que la agrava día con día. Frenarlo es el primer paso; lo haremos con equidad en el peso de los costos e impulsando los cambios cualitativos que nos sirvan de apoyo firme para avanzar más rápidamente hacia la sociedad igualitaria, en cuanto sea posible."

El primer mes del sexenio, gobernado a paso veloz, ha revelado, al menos, tres propósitos que el nuevo equipo ha perseguido sin cuartel. En primer lugar, aparece la obsesión recurrente del nuevo gobierno por desligarse del anterior. En su momento, para desembarazarse de la sombra de Díaz Ordaz, Luis Echeverría inició un peregrinaje por todas las universidades del país, en busca de la confianza estudiantil despedazada por las balas y el autoritarismo oficial. Para enfatizar diferencias, bautizó su política económica como "El desarrollo compartido", aparente viraje del desarrollo con estabilidad practicado por los gobiernos anteriores. Los males del país, la intolerancia política y la represión, fueron vistos como los últimos cartuchos disparados por los emisarios del pasado. Seis años más tarde, José López Portillo, amigo de Echeverría en la juventud, se deshizo de los rumores de continuidad apresurando la indemnización de los latifundistas expropiados en Sonora, resanando las esperanzas empresariales con nuevos incentivos, y desterrando a algunos de sus antiguos colegas de gabinete. Dos de ellos, sorprendidos en viejos fraudes, llegaron a ver el mundo detrás de las rejas, y el expresidente se fue como embajador al fin del mundo: las islas Fidji. Hoy, José López Portillo está en su casa viendo cómo su política de alianzas con la iniciati-

va privada ha resucitado como un Frankenstein de nuevas costuras. Desafortunadamente, el nuevo gobierno parece identificar al lopezportillismo como las últimas —y más importantes— medidas del sexenio, y ellas se han constituido en la piedra de toque del deslinde. De manera automática, Carlos Tello fue borrado del nuevo equipo, y su política financiera fue rechazada y tachada de "populista". Las tasas de interés en las inversiones a largo plazo recuperaron su ascenso, para fomentar el ahorro. El nuevo director del Banco de México sostiene que el ahorro es inversión. En seguida, desapareció el total control de cambios, y el dólar alcanzó 150 pesos en el mercado libre. En el mercado controlado, se anunció una devaluación del 50% para 1983. Finalmente, después de una plática con los banqueros expropiados, y un par de días antes de la clausura de las actividades de la Cámara, el presidente envió una iniciativa que pone a la venta el 34% de las acciones de la banca nacionalizada y permite la reincorporación de los exbanqueros en su administración. Como colofón, se anuncia su justa indemnización. Hasta ahí llegó la euforia de septiembre.

Los demás signos en donde el nuevo gobierno pinta su raya son menos visibles: el SAM y COPLAMAR, dos proyectos dependientes del presidente, que no llegaron a institucionalizarse, pasaron a mejor vida sin honores; del nuevo gabinete, no hay un solo secretario que provenga de la administración de ayer, con la excepción de Pedro Ojeda, que proviene, gracias a su lealtad a toda prueba, de la de anteayer; volvieron dos expulsados: Jesús Reyes Heróles, bujía de la Reforma Política, y Miguel Mancera, recio creyente de la doctrina monetarista. Si el afán de diferenciación va más lejos, la revolución centroamericana pierde a un apoyo crucial, Estados Unidos ganará un aliado no menos importante, las

empresas que eran propiedad de los bancos serán devueltos, y pasado mañana estaremos adentro del GATT.

En segundo lugar, el presente gobierno repite la fórmula del lopezportillismo original: cicatrizar heridas de la iniciativa privada, restablecer la confianza, invitar a los empresarios a ser partícipes del desarrollo y el festín. Esta actitud no sorprende: desde los primeros días de la nación mexicana, la burguesía fue hija del Estado, y no al revés. Juárez liquidó el poder territorial de la Iglesia, y en unas cuantas décadas apareció una recia clase de terratenientes laicos, que resistieron airoso el oleaje revolucionario; Cárdenas les cortó la cabeza montado en la reforma agraria, y los siguientes gobiernos subordinaron la agricultura a los intereses de la industria y del capital monopolista agrupado en la banca; López Portillo fue el último verdugo, pero el Estado no ha dejado de extrañarlos. Desde que el poder económico saltó del clero a los terratenientes y de estos a los banqueros, pasó más de un siglo, pero el Estado no ha abandonado su papel de patriarca que alimenta y ejecuta a sus engendros privados. La presente administración busca recrearlos cuanto antes. Las medidas tomadas en contra del último respiro del sexenio pasado, apuntan también en esta dirección. Sin los burócratas "populistas", con los banqueros encajados en los consejos de administración y con el 34% de las acciones en sus manos, la banca nacionalizada funcionará como antes de la nacionalización: las tasas de interés harán más redituable el ahorro que la inversión, y las captaciones se canalizarán hacia actividades más lucrativas, evitando las dispendiosas obras sociales. La libertad cambiaría completa un panorama en el que la especulación vuelve por sus fueros. Sin embargo, la principal medida encaminada a devolver la fe de los empresarios en su país, fue la elevación de la economía mixta a Ran-

go Constitucional. Desde ahora, la propiedad privada de los particulares ha quedado como un derecho inalterable, y las futuras nacionalizaciones han quedado detenidas por la ley. Con todo, los empresarios no están satisfechos: la desaparición de las sociedades anónimas, el propósito de sanear las finanzas del Estado a cualquier precio, el retiro de algunos subsidios y el aumento de los impuestos, han contribuido a que los empresarios sigan espantados ante "la estatización de la economía"

En tercer lugar, el mes de diciembre hizo evidente que las enseñanzas del monetarismo han hechado raíces en todas las dependencias económicas del Estado. Esta escuela ha cruzado la política económica de los Estados Unidos y varios países de Europa y Sudamérica con resultados diferentes, pero casi todos ellos socialmente negativos. En Argentina, el combate a la inflación ha disparado los precios a la estratosfera, y ha dejado al peso en una relación que equivale a .00002 dólares. En los Estados Unidos, las recetas monetaristas han reducido el gasto público en las áreas de beneficio social, pero también han reducido el interés bancario y no han devvaluado el dólar. El resultado ha sido un encojimiento real de la inflación —al 6%— y 11 millones de desempleados. En México, este diseño ha llevado anclas a partir de un gasto público austero, que reduce la inversión industrial, y que eleva la captación de recursos indirectos —el IVA—; una nueva devaluación en el marco de un mercado libre de divisas; una contención salarial que llega a la cuarta parte de la inflación; un alza del interés bancario; un freno al crecimiento de la economía en su conjunto, y un no deseado pero inevitable desempleo. Las medidas no son nuevas; pero ahora son mucho más radicales. Pablo González Casanova sostiene que las tesis monetaristas son insostenibles, y que sus resultados han sido siempre adversos en

en todos los países en los que se han aplicado. Un trabajador de una gasolinera me dijo: "Ahora lo que quieren es bajar los precios subiéndolos".

Tanto el doctor en sociología como el trabajador de la gasolinera, forman parte del reducido grupo de la población que está informada de lo que está sucediendo. Lo verdaderamente grave es que la mayoría no lo está. Las correas de transmisión de órdenes e información del PRI, los gobiernos de los Estados y los municipios, los sindicatos, los ejidos y las cooperativas se quedaron al margen de toda explicación. Brotadas del Ejecutivo y tramitadas por un Legislativo extenuado por la insistencia, las decisiones de diciembre quedaron arrinconadas en la esfera de dos poderes sin ramificaciones sociales, y aumentaron la generalizada noción de que un puñado de hombres empeoran cada vez más los destinos de 70 millones de mexicanos. Eso puede ser, si no una bomba de tiempo, un millón de granadas.

La modernización del sistema, que ha avanzado a contrapelo de la crisis desde el gobierno de Luis Echeverría, busca saldar cuentas con sus rezagos en la presente administración. Sin embargo, los parámetros para su actuación no son los más favorables: El panorama interno está lejos de ser halagador; las postrimerías de la bonanza petrolera dejaron a las finanzas públicas en quiebra, la reducción del gasto público ha desmantelado la mitad de los empleos creados, la autosuficiencia alimentaria se esfumó con las bendiciones del auge, los precios se convirtieron en el azote de la nación y las semillas de violencia germinan en las grandes ciudades. La vista internacional no es más feliz: los precios de las materias primas en el mercado no muestran signos de una pronta recuperación; de los organismos internacionales, sólo el Departamento de Energía de los Estados Uni-

dos pronostica un aumento de la demanda petrolera después de 1985, la recesión flagela las economías de todos los países capitalistas; las tasas de interés bancario difícilmente bajarán, por lo que la deuda externa resulta, en los términos que fue contraída, impagable; los Estados Unidos no parecen dispuestos a comprar nuestros productos en condiciones más favorables.

Todo indica que la crisis no será combatida con una mayor y nueva producción, sin con controles al circulante y fomentos al comercio. Hay además, en el ánimo de muchos funcionarios, un deseo explícito de acabar con la demagogia, apiastar la corrupción gubernamental, enterrar los caciquismos, las mediaciones, las componendas, limitar el crecimiento del Estado e impedir el nacimiento de una burguesía burocrática. "Menos política y más administración", decía Don Porfirio al cabo de tanta revuelta liberal. "Nada de demagogia y más eficiencia", proclama el nuevo régimen haciendo a un lado inconformidades y populismos. El rumbo está delineado, pero hay aún un consenso que lo respalde. La nueva alianza sin producción ha sido planteada ante la reticencia de los empresarios, la informalidad de los sindicatos, el rechazo de la oposición y la indiferencia de la mayoría. El sistema de alianzas y negociaciones para definir políticas, legado de la revolución, hasta ahora ha sido ignorado. Si continúa en el olvido, diremos un adiós definitivo a ese movimiento que barnizó todos los discursos de los últimos setenta años, y que fue alabado por Fidel Castro en el brindis de aquella noche calurosa. Como recuerdo, nos quedaremos con la fotografía de aquellos empresarios que iban a hacer un plantón en la Cámara de Senadores en 28 diciembre, para protestar por las nuevas medidas, y que prefirieron ir a depositar flores al Monumento a la Revolución.

Mario Huacuja